

Propuestas de política económica de los actores sociales de la Comunidad Valenciana¹

Antonio Sánchez Andrés (Departamento de Economía Aplicada –Política Económica–, Universidad de Valencia y Director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana)
tono.sanchez@uv.es

Tema: *Los actores sociales valencianos se han reunido para definir la Estrategia de política económica y social para la Comunidad Valenciana hasta 2040. Entre ellos encontramos a: los partidos políticos, los sindicatos, la Cámara de Comercio de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Comité Económico y Social de la Comunidad.*

Resumen: Con el fin de elaborar una Estrategia de política económica y social para la Comunidad Valenciana hasta el año 2024, esbozamos las medidas propuestas por los representantes políticos, sindicales, empresariales y académicos (CCOO, UGT, la Cámara de Comercio de Valencia los partidos políticos con representación en les Corts, y el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana) para enfrentar los retos económicos y sociales de la región. Se busca identificar coincidencias, divergencias y el grado de consenso alcanzado en torno a los grandes retos estructurales del territorio, como la reindustrialización, la vivienda, el turismo, la digitalización y la financiación autonómica. La estructura del documento se organiza en varios apartados: primero, se examina la política industrial impulsada por la Generalitat Valenciana como eje central de la estrategia 2024–2028; luego, se analizan las propuestas sindicales centradas en el empleo de calidad, la sostenibilidad y la equidad social; posteriormente, se recogen las medidas de la Cámara de Comercio orientadas a la competitividad y la inversión; se estudian las posiciones de los partidos políticos en materia de industria, turismo, vivienda y financiación autonómica; y por último, se resumen las aportaciones del Comité Económico y Social sobre los principales retos de política económica. Ante todo, destaca un amplio consenso en torno a la reindustrialización como motor del crecimiento y la cohesión social. No obstante, persisten divergencias en el grado de intervención pública, las políticas de vivienda y turismo y la orientación fiscal. Así pues, aunque la política industrial es el ámbito más avanzado, el diálogo entre actores sociales sigue siendo esencial para articular una estrategia económica coherente, sostenible y compartida hacia 2040.

1. INTRODUCCIÓN

Contar con un espacio de diálogo plural destinado a debatir los principales retos económicos, industriales y sociales del territorio valenciano, así como las acciones públicas a emprender es crucial para el establecimiento de cualquier estrategia de política económica a largo plazo. En este sentido, marcar como horizonte el año 2040 refleja la capacidad de la política económica para proyectar el futuro socioeconómico de los valencianos y de las valencianas.

La Generalitat Valenciana, los partidos políticos con representación en Les Corts (Compromís, Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP) y Vox), los sindicatos Comisiones Obreras-PV (CCOO-PV) y Unión General de Trabajadores-PV (UGT-PV), la Cámara de Comercio de Valencia y el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (CES-CV) han aportado sus propuestas con el propósito de afrontar los grandes retos estructurales de la economía valenciana. Primordialmente, los retos son: la necesidad de reindustrialización, la mejora de la

¹ Las propuestas se derivan del I Foro de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana, celebrado el día 25 de octubre en el Ateneo Mercantil de Valencia.

productividad y la competitividad del sector empresarial, las condiciones laborales, la cohesión territorial, el modelo turístico, la financiación autonómica, la sostenibilidad ambiental, la digitalización y el acceso a una vivienda digna.

El presente Análisis PES analiza comparativamente las principales propuestas de política económica formuladas por los distintos agentes, atendiendo a sus coincidencias, divergencias y al grado de consenso alcanzado para consolidar una estrategia de política económica para el año 2040. En primer lugar, se presenta la política industrial impulsada por la Generalitat Valenciana, considerada el núcleo más avanzado, en términos de acciones emprendidas y resultados, de la estrategia para 2040. En segundo lugar, se examinan las posiciones de los sindicatos y de la Cámara de Comercio, con especial atención a su papel en la definición de la reindustrialización, la política turística, la política de vivienda y la política social de pensiones. En tercer lugar, se revisan las propuestas de los partidos políticos en torno a la industria, el turismo, la vivienda y la financiación autonómica; y, finalmente, se recogen las aportaciones del Comité Económico y Social como órgano consultivo de referencia a los principales retos de política económica. Culminaremos el trabajo con una síntesis valorativa sobre el grado de convergencia entre los actores y los principales desafíos aún pendientes.

2. LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Desde la Generalitat Valenciana, la política industrial estaría fuertemente vinculada al mercado laboral, partiendo de que una política industrial activa debe fijar empleo. En primer lugar, se trataría de equilibrar el desarrollo industrial con promoción de la industria alejada de las urbes; en segundo lugar, mantener los salarios del sector industrial, dado que están por encima del salario medio de la economía; por último, garantizar la seguridad y estabilidad laboral.

Así pues, se pretende que esta política se alinee con las acciones y objetivos planteados en el Informe Draghi. Los ejes principales de la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028² serían: la descarbonización de pymes y micropymes, la ganancia de autonomía estratégica y la disposición de la financiación necesaria para generar una inversión fuerte y sostenida en el sector.

Desde la administración valenciana se arguye que el Proyecto de Ley Industrial Estatal de 2024³ avanza con retraso y afronta una serie de retos estructurales que condicionan su capacidad para transformar el tejido productivo español. Entre los principales desafíos destacan el escaso peso del sector industrial en el PIB, que exige políticas decididas para su fortalecimiento, y la fragmentación territorial derivada del modelo autonómico, que dificulta la coordinación de estrategias comunes. Ello se suma al elevado porcentaje de micropymes sobre el total de empresas, hecho que limita la competitividad y reclama un mayor equilibrio del tamaño empresarial. Otra limitación es la insuficiente liquidez pública disponible desde este proyecto de ley para dinamizar el sistema empresarial y apoyar el crecimiento de las empresas industriales.

En su formulación actual, la norma presenta dificultades para lograr una mejora real de la competitividad industrial. Desde la Generalitat se aprecia que, en lugar de simplificar, introduce nuevas rigideces y no reduce la carga administrativa existente. Asimismo, incorpora barreras adicionales, especialmente en materia de certificaciones, que pueden obstaculizar la actividad

²<https://portalindustria.gva.es/documents/176094993/177178569/Estrategia+de+Reindustrializaci%C3%B3n+de+la+Comunitat+Valenciana+2024-2028/affd0991-2b84-4a90-81ce-1b55b955f914>

³https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-43-1.PDF?utm_source=chatgpt.com

empresarial. La normativa, de acuerdo con la Generalitat, se centra excesivamente en la gobernanza estatal y en la organización interna de la política industrial, sin priorizar la creación de organismos o mecanismos que permitan una articulación efectiva con las pymes y los actores territoriales. Además, la ausencia de una dotación presupuestaria específica limita de forma considerable su capacidad de implementación.

En contraste, la política industrial de la Generalitat Valenciana se postula como alternativa efectiva, al poseer una orientación más operativa y unos resultados que ya se están realizando. Esta estrategia 2024–2028, estructurada en torno a catorce ejes, impulsa acciones concretas. Entre sus medidas son reseñables: una política de clústers en colaboración con la Universidad de Valencia, la apuesta por la simplificación burocrática y también por la sostenibilidad energética. A su vez, se prioriza una energía más asequible, fiable y sostenible que refuerce la competitividad de la industria valenciana. En paralelo, la ampliación del suelo industrial, mediante acuerdos con asociaciones empresariales, facilitaría la implantación de nuevas actividades productivas. De acuerdo con el seguimiento de estas medidas, han contribuido al incremento del Índice de Producción Industrial (IPI) y a la generación de empleo, evidenciando la efectividad de una política industrial adaptada al territorio y basada en la cooperación público-privada.

3. POLÍTICAS ECONÓMICAS DESDE LOS SINDICATOS (CCOO-PV y UGT-PV)

Desde una perspectiva general, las propuestas de Comisiones Obreras-PV (CCOO-PV) se han centrado en consolidar un proceso de reindustrialización sostenido a través de una política industrial sólida y coherente en sintonía con la Estrategia de Reindustrialización 2024–2028 ya emprendida. El sindicato subraya la importancia del diálogo social como motor para impulsar estas transformaciones y defiende la necesidad de una planificación integral de las áreas industriales que redunde en la mejora de infraestructuras, el transporte y los accesos a los polígonos. Además, se decanta por una transición digital inclusiva, basada en una mayor inversión en formación y capacitación tecnológica del personal trabajador, confiriendo una importancia capital a la calidad y remuneración adecuada del empleo.

En referencia a la reforma fiscal, CCOO arguye como esencial reforzar los servicios públicos mediante una política fiscal fuerte y progresiva, que garantice una financiación sostenida del Estado del bienestar. Del mismo modo, aboga por la internacionalización de la industria valenciana apoyada en la seguridad jurídica y la sostenibilidad ambiental como ejes de competitividad. Como singularidad plantea incorporar mecanismos de mantenimiento del empleo dentro de la estrategia de reindustrialización emprendida y vincular las subvenciones públicas a la creación de empleo de calidad siempre con sistemas de evaluación y seguimiento de estas ayudas. En cuanto al ámbito formativo, el colectivo sindical propone impulsar la formación continua en las empresas, a través de planes internos, y reforzar la Formación Profesional y la FP Dual; todo ello para la adaptación a los cambios tecnológicos y productivos.

Por otra parte, la Unión General de Trabajadores-PV (UGT-PV) pone el acento en una gobernanza global basada en la justicia y el diálogo social, que pasaría por fortalecer los salarios industriales y fomentar la inversión en resiliencia frente al cambio climático, con especial atención a la gestión del agua y las emergencias ambientales. Para reforzar la estrategia industrial del Consell (2024-2028) comentada anteriormente, UGT argumenta en favor de la aprobación del reglamento que desarrolle las áreas industriales para articular el tejido e infraestructuras industriales en función de las necesidades de los trabajadores. Otras medidas complementarias propuestas por el sindicato comprenden la creación de un índice de calidad del empleo industrial que mida su estabilidad y a la promoción de una inversión en defensa entendida de forma transversal, más allá de la inversión en armamento.

Ambos sindicatos también han propuesto medidas relacionadas con el turismo, las pensiones y la vivienda, con el fin de ofrecer una visión más completa y articulada del conjunto de políticas sociales y económicas que la Comunidad Valenciana necesita en sintonía y complementación con la estrategia de política industrial de la Generalitat.

3.1 Turismo

La precariedad y la temporalidad del empleo, los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo y el desajuste entre los salarios y los aumentos recientes de los precios en el sector turístico se erigen como las principales problemáticas a abordar por las políticas públicas.

Frente a ello, CCOO plantea una estrategia orientada a promover un turismo de mayor calidad, que apueste por la dignificación de las profesiones del sector a través de una formación continua y especializada para servir, en última instancia, como mecanismo de creación y atracción del empleo. En este sentido, se subraya la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico sostenible, basado en el mantenimiento del patrimonio, la mejora de la movilidad y la limpieza de los destinos turísticos. Asimismo, otro vector de actuación pública pasa por impulsar la digitalización del sector, facilitando el acceso de las pymes a herramientas tecnológicas mediante el desarrollo de aplicaciones móviles específicas que faciliten sus actividades económicas. Por lo que respecta a medidas de política social, se defiende la adopción de medidas de conciliación y salud laboral que mejoren las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los empleados. En complementariedad con estas políticas, una política integral de vivienda, que garantice el acceso a alojamiento digno para los trabajadores fijos y temporales del sector turístico, resulta el eje central de la política socioeconómica de atracción y creación de empleo digno.

Por su parte, UGT pone el foco en la mejora de las condiciones salariales mediante la negociación colectiva, como vía para revertir la precariedad y garantizar una retribución justa. Además, considera fundamental avanzar en la regulación de los pisos turísticos, con el fin de equilibrar la actividad económica del sector con el derecho a la vivienda. A su vez, el sindicato aboga también por impulsar políticas que favorezcan la desestacionalización del empleo turístico, contribuyendo a la estabilidad laboral y a la diversificación de la oferta turística durante todo el año. Por último, se propone la implementación de *kits digitales* para pymes, orientados a modernizar la gestión empresarial y mejorar la competitividad del tejido productivo turístico a través de la digitalización.

3.2 Pensiones

En materia de pensiones, CCOO defiende la consolidación de un sistema público fuerte y sostenible, basado en la equidad y la suficiencia de las prestaciones. En concreto, se trataría de retomar el Pacto de Toledo para avanzar en la eliminación de las reformas paramétricas de 2013, que redujeron las pensiones y debilitaron el poder adquisitivo de las personas jubiladas. Otro punto fuerte del sistema de reparto sería el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional como instrumento para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, reforzando la solidaridad entre generaciones. Entre otras de sus propuestas se arguye el refuerzo de la cuota de solidaridad con el objetivo de paliar la brecha de género existente en las pensiones, así como mantener la revalorización de las prestaciones conforme al IPC, asegurando que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Simultáneamente, es crucial promover la flexibilidad del sistema como instrumento de adaptación a la estructura demográfica y social a través de la diversificación de fórmulas de jubilación parcial y la revisión de los coeficientes reductores. En adición a todo ello, el sindicato señala que cabe vincular las

políticas de pensiones con aquellas dirigidas a la juventud y la vivienda, de modo que se garantice la continuidad del sistema mediante empleo estable y acceso a condiciones de vida dignas.

UGT enfatiza la relevancia de las políticas demográficas y migratorias para asegurar la sostenibilidad del modelo público de pensiones, reconociendo el papel de la inmigración en tanto que elemento esencial para el relevo generacional y el equilibrio financiero del sistema. En esta misma línea, la reindustrialización también sería una vía para generar nuevas oportunidades laborales para los jóvenes, fortaleciendo tanto el empleo de calidad como la base contributiva que sostiene el sistema de protección social.

3.3 Vivienda

Por lo que a vivienda atañe, CCOO se pronuncia a favor de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para los trabajadores y colectivos más vulnerables. Entre sus medidas propuestas, destaca la compra y movilización de viviendas vacías para destinarlas al alquiler social, así como la limitación de precios en las zonas tensionadas con el fin de contener la especulación y facilitar el acceso a la vivienda habitual. Se debería aplicar de forma efectiva de la Ley Estatal de Vivienda, como marco normativo que refuerce los derechos de los inquilinos y promueva la función social de la propiedad. En esta línea irían también el aumento del parque de viviendas de protección oficial y el establecimiento de límites a las viviendas de uso turístico (VUT), con el objetivo de equilibrar el mercado y priorizar el acceso residencial frente al uso turístico intensivo.

Pero, el marco de todas estas medidas debería ser un Pacto de Estado en materia de vivienda, como propuesta singular de UGT, que establezca una estrategia de largo plazo para favorecer el acceso a la vivienda en todo el territorio. Este sindicato propone, a su vez, la inclusión de cláusulas específicas en la negociación colectiva que contemplen medidas de apoyo al acceso y mantenimiento de la vivienda, reforzando así el papel de los convenios laborales como herramienta de cohesión social y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.

4. PROPUESTAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA

Las propuestas de política económica de la Cámara de Comercio de Valencia se centran en la reindustrialización con una perspectiva ambiental y social, su objetivo fundamental es incrementar hasta un 20 % el peso del sector industrial en el PIB. La estrategia a seguir buscaría combinar crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y cohesión social, mediante políticas integrales que fortalezcan tanto la competitividad como la resiliencia del tejido productivo.

Entre las medidas a emprender se ha destacado la promoción de la energía nuclear, que garantizaría un mix energético limpio que contribuya a la sostenibilidad y a la estabilidad de los precios. Asimismo, se trataría de impulsar la inversión extranjera directa en las pymes de la Comunidad Valenciana, buscando atraer capital y fomentar el desarrollo sectorial. La simplificación administrativa y burocrática sumada a los incentivos fiscales se orientan a mejorar la competitividad y facilitar el crecimiento del tamaño de las empresas existentes. La Cámara de Comercio también propone la creación de entornos industriales de valor, así como la promoción de la colaboración entre pymes y el ecosistema empresarial, mediante mecanismos de integración y cooperación que favorezcan sinergias intersectoriales. La política industrial a seguir debería incluir el apoyo directo a las empresas, la asistencia económica al emprendimiento industrial, el acceso a herramientas financieras y la implementación de *kits*

digitales para pymes; unas acciones orientadas a modernizar la gestión y la producción en las empresas manufactureras.

La visión intersectorial de la estrategia de política económica que se propone se completa con otro conjunto de medidas. A saber: la gestión de la inmigración cualificada para orientar adecuadamente la mano de obra especializada hacia los sectores más necesitados; la mejora de la infraestructura territorial, destacando proyectos como el Corredor Mediterráneo o la ampliación del puerto de Valencia; y la potenciación de los transportes, con el objetivo de aumentar la cohesión territorial. Adicionalmente, según esta institución las políticas de reindustrialización deberían tener en cuenta la polarización política del contexto actual, sobre todo, en la medida en la que las políticas sociales puedan paliar este fenómeno al integrarse dentro de la propia estrategia industrial. En conjunto, estas políticas buscan consolidar un modelo industrial competitivo, sostenible y socialmente equilibrado.

5. POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos con representación en Les Corts Valencianes poseen diversas propuestas de política económica de las cuales resalta el consenso sobre el efecto positivo de la estrategia industrial emprendida por el Gobierno de la Generalitat. Cabe reseñar que otro tema en el que hay cierto consenso es en la necesidad del cambio de modelo de financiación autonómica. Por el contrario, la política económica de los partidos presenta disonancias más variadas en torno a turismo y vivienda.

5.1 Estrategia de reindustrialización (2024-2028)

Desde Compromís la estrategia se valora positivamente, destacando la planificación industrial como una buena herramienta para la reindustrialización de la economía valenciana y representando un paso importante hacia la competitividad y la consolidación de un modelo productivo diversificado. La formación resalta la coordinación institucional y el impulso de políticas industriales de largo plazo que refuercen las capacidades propias del territorio.

Por su parte, VOX considera acertado el objetivo de elevar hasta el 20 % el peso del sector industrial en el PIB, señalando la importancia de la innovación como motor de atracción empresarial. Defiende el desarrollo de proyectos estratégicos, especialmente en ámbitos como los semiconductores y la energía eléctrica a bajo coste, y propone la aplicación de beneficios fiscales para favorecer la inversión y la competitividad del sector.

El Partido Popular (PP), partido que ha emprendido las acciones de la estrategia desde el Consell, destaca la relevancia de avanzar en la modernización industrial como su elemento central. Más concretamente, valora positivamente la inversión en empleo de calidad, destacando la sintonía con las propuestas sindicales en este ámbito. Además, prioriza una mayor rapidez y simplificación administrativa para respaldar una política de clústers construida desde la colaboración de todo el tejido empresarial con las instituciones.

El foco del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se posa sobre la necesidad de aprovechar las fortalezas estructurales de la Comunidad Valenciana, es decir, su capital humano y su energía asequible, para reducir las desigualdades en el reparto del crecimiento económico. Esta formación política propone orientar la estrategia industrial hacia la mejora de los salarios en los sectores de I+D y el aumento de la renta per cápita en términos generales, contribuyendo a una reindustrialización más equitativa y sostenible.

5.2 Turismo

Aunque todas las formaciones reconocen la relevancia estratégica de la política turística, divergen en las prioridades, el grado de regulación y la orientación del crecimiento del sector. Para VOX, la prioridad pasa por el aumento del número de turistas y el refuerzo de la marca España como elemento de proyección internacional. El partido se decanta por una adaptación de la oferta turística que permita desestacionalizar la demanda, potenciando todos los tipos de turismo (cultural, rural, de interior, gastronómico...) y no únicamente el de sol y playa. En paralelo, defiende un entorno de seguridad, sin excesiva burocracia, que favorezca la inversión y la actividad empresarial. Entre sus medidas concretas se incluyen los bonos de viaje, la bonificación de las tasas turísticas, la reducción del IBI a los establecimientos hoteleros y la creación de un fondo para festivales en temporada baja; todas ellas teniendo presente el objetivo de incentivar el flujo turístico durante todo el año.

El PSOE sostiene que la política turística debe orientarse hacia una mejora de la calidad de vida de los residentes, apostando por una regulación del sector que garantice un equilibrio entre el desarrollo turístico y el bienestar ciudadano. En este sentido, se promueve la implantación de una tasa turística, concebida como instrumento para reinvertir los ingresos en servicios públicos y en garantizar la seguridad y sostenibilidad local.

Desde el Partido Popular (PP), la política turística debe llevarse a cabo en torno a la diversificación de la oferta y la generación de empleo con mayor valor añadido, buscando un modelo de turismo sostenible y de calidad. El PP rechaza la tasa turística por considerarla un obstáculo a la competitividad del destino y defiende el consenso con los sindicatos y los agentes del sector para regular la actividad turística de manera equilibrada y participativa.

Por último, en Compromís se caracteriza el modelo turístico actual como insostenible y de baja rentabilidad económica y social. Proponen frenar la expansión descontrolada del turismo y redirigir los recursos hacia la inversión industrial y la mejora de las infraestructuras, con el fin de reequilibrar el modelo productivo valenciano y reducir la dependencia de la economía valenciana del sector turístico. En suma, las distintas posiciones políticas evidencian un debate entre la expansión y la regulación del turismo, entre la necesidad de mantener su peso económico y el reto de hacerlo compatible con la sostenibilidad, la diversificación y el bienestar social.

5.3 Vivienda

La política de vivienda resulta uno de los ejes centrales del debate político valenciano, en el cual los distintos partidos presentan diversas visiones sobre cómo abordar los problemas de acceso, regulación y equilibrio del mercado inmobiliario. El debate refleja disenso entre posturas, a pesar de que la vivienda se postula con una relevancia crucial para el desarrollo económico y social de los valencianos.

El PSOE defiende una intervención pública decidida para la vivienda, con medidas como la moratoria en la tramitación y otorgamiento de licencias para pisos turísticos, que posee el objetivo de frenar la especulación y recuperar vivienda para uso residencial. A su parecer, la tasa turística podría contribuir a generar ingresos destinados a políticas sociales y de vivienda, junto con garantizar una inversión sostenida en el aumento de la oferta pública. Ello pasaría por establecer límites en la vivienda, disponiéndola solo para los residentes habituales y, a su vez,

por un seguro de impago público, aunque su aplicación en torno a unos márgenes de precios supone dificultades derivadas de la inflación.

El Partido Popular (PP) centra su estrategia de vivienda en el fomento de la oferta a través de la construcción de nueva vivienda, en colaboración con los ayuntamientos, y en paralelo dispone reducciones de la carga impositiva para propietarios e inquilinos. Como punto de divergencia con otras formaciones, se opone al topado de los alquileres, defendiendo en cambio ayudas al alquiler y avales específicos para jóvenes. Asimismo, resalta la importancia del mecanismo de compensación como seguro de impago integrado dentro del Plan Vive, para ofrecer estabilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.

Para Compromís las propuestas a emprender se dirigen a fortalecer el papel del sector público en la planificación y regulación del mercado inmobiliario. Destacan las propuestas políticas como: una tasa turística, al igual que propone el Partido Socialista; la promoción de vivienda protegida y una política urbanística activa, que incluye el registro de solares disponibles; el cumplimiento de plazos en los proyectos de construcción y la regulación pública de los alquileres. En adición, se busca potenciar el incremento de las viviendas de uso residencial para garantizar un acceso justo y sostenible.

Cerrando el apartado de vivienda, VOX argumenta en favor de la liberalización del mercado de vivienda y la liberación de suelo para la construcción. Apuesta por mejorar las infraestructuras de transporte para favorecer la movilidad y el acceso a nuevas zonas habitacionales, así como por ofrecer beneficios fiscales y avales tanto a propietarios como a inquilinos, junto con fórmulas de alquiler con opción a compra que faciliten la adquisición progresiva de vivienda. En síntesis, las posiciones de los partidos muestran diversidad de medidas con distintos grados de intervención pública y liberalización del mercado en vivienda.

5.4 Infrafinanciación autonómica

Un problema que se significa como constante para la Comunidad Valenciana deriva de las consecuencias negativas del modelo de financiación autonómica vinculado a la deuda pública valenciana. Sobre tal problemática las formaciones políticas con representación en Les Corts presentan unanimidad en cuanto a la necesidad del cambio de modelo de financiación hacia otro que beneficie a los valencianos. Las disonancias entre estos partidos se sitúan en cómo y de qué forma se debería constituir un modelo alternativo de financiación.

En este asunto, existe la alineación entre Compromís, el Partido Popular y el Partido Socialista respecto a las medidas a emprender para resolver el problema. A saber, las medidas a emprender serían la disposición de un fondo de nivelación transitorio y la compensación estatal de la deuda acumulada, y más específicamente, para cubrir aquella parte de la deuda estructural imputable directamente al sistema de financiación. VOX, por su parte, se muestra discordante respecto a estas medidas desaconsejándolas, a pesar de postularse en favor del cambio de modelo de financiación.

6. MEDIDAS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CESCV)

El Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana, derivado de su Memoria de 2024 plantea medidas en distintos sectores, pero en especial abarcando retos como la

infrafinanciación, la política industrial, la digitalización, las infraestructuras, la vivienda, el cambio climático y el turismo.

Como propuesta central para enfrentar la infrafinanciación persistente, el CES CV se basa en los análisis de los expertos de Les Corts Valencianes, abogando por revisar el método para calcular la población ajustada y un mecanismo de compensación entre territorios ante la abultada deuda. En el ámbito de la política industrial, el CES CV, busca con fuerza una estrategia de reindustrialización. En este sentido, se trataría de subir de manera efectiva el Valor Añadido Bruto (VAB) industrial con implicación de todos los agentes sociales y de las instituciones públicas.

En relación a la productividad y digitalización, se pone el énfasis en robustecer las políticas de atracción de talento para sumar expertos y expertas en TIC a las empresas valencianas. Esto se realizaría a través de incentivos, apoyos para contratar y programas de formación. En efecto, sugiere construir una infraestructura digital puntera y para todos, impulsando la digitalización inclusiva de los servicios públicos, apoyando la transformación digital de pequeñas y medianas empresas junto a industrias tradicionales y, además, expandir los programas de formación digital para toda la población.

En lo tocante a infraestructuras y transportes, desde el CES CV se pretende optimizar la calidad y la frecuencia del transporte público para la descarbonización. Igualmente, resulta esencial el adecuado mantenimiento y la conservación de las infraestructuras existentes. Con un carácter más específico se recomienda reforzar y aumentar los puntos de recarga para vehículos eléctricos, manteniendo las ayudas a la compra de estos vehículos.

Con respecto al cambio climático y la sostenibilidad, el CES CV reitera su compromiso con la transición hacia una economía sostenible, resiliente y climáticamente neutra. Para lograrlo, aconseja implementar acciones que pongan el bienestar humano al frente de la iniciativa climática y, además, activar sin demora las herramientas requeridas para una transición ecológica organizada de las industrias, incluyéndose la creación de una estrategia integral de transición justa. En este sentido, es necesario estimular las fuentes de energía renovable, facilitar la adaptación de las industrias frente a la falta de agua, optimizar las condiciones de las reservas subterráneas de agua y robustecer los recursos para la prevención y el combate de los incendios forestales a lo largo de todo el año.

Respecto a la vivienda, el CES CV determina que es crucial desarrollar una política integral, bien organizada y eficiente que asegure el derecho a una vivienda decente y apropiada, particularmente para los grupos más frágiles y los jóvenes. Esta política tendría que complementarse con el sostén de acciones públicas que reduzcan los desahucios hipotecarios.

Finalmente, con el fin de impulsar la recuperación del sector servicios, y eso comprende el turismo, después de la DANA de 2024, el CES CV sugiere establecer una coordinación efectiva entre las administraciones públicas, asegurando que las ayudas directas compensen con exactitud los daños sufridos. En esta línea, se propone trabajar juntos para redirigir los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y también para reprogramar los fondos estructurales con la meta de acelerar la ejecución de los recursos que ya se han movilizado.

7. CONCLUSIONES

El consenso entre los actores sociales de la Comunidad Valenciana se refleja en la reindustrialización como instrumento esencial para aumentar el peso del sector industrial en el PIB, mejorar la competitividad y generar empleo de calidad. Si bien para los agentes es clara la necesidad de fortalecer el tejido productivo y mejorar la coordinación institucional, las diferencias de política económica afloran en torno al grado de intervención pública, la política fiscal y la orientación de la regulación sectorial, así como la deseabilidad de medidas concretas, en especial, en torno a vivienda y turismo.

Junto a la política industrial, los ámbitos de la vivienda, las pensiones y la transición digital configuran un conjunto de políticas complementarias e intersectoriales que buscan consolidar un modelo económico más equilibrado y socialmente justo para todos los agentes. Tanto la Generalitat Valenciana como los sindicatos, la Cámara de Comercio y los partidos políticos coinciden en la urgencia de consolidar una industria más innovadora, sostenible y digitalizada. En tal contexto, la política industrial se erige como el eje vertebrador del debate, al ser percibida por todos los agentes como el motor del cambio productivo y la base para la creación de empleo estable y de calidad. No obstante, las divergencias se ciernen sobre los medios para alcanzarlo: mientras los agentes sociales defienden una intervención pública decidida, acompañada de planificación territorial y políticas redistributivas, los representantes empresariales y parte de las formaciones políticas priorizan la simplificación administrativa, los incentivos fiscales y la atracción de la inversión privada. En el ámbito del turismo, las posturas se dividen entre aquellos agentes que se inclinan más hacia la expansión de la oferta y la liberalización del mercado, y aquellos que priorizan una regulación más estricta que preserve la sostenibilidad y el bienestar de los residentes. En vivienda, las diferencias son aún más notables: algunos agentes defienden el control de precios, la promoción pública y la regulación de los pisos turísticos, mientras otros apuestan por la liberalización del suelo, los incentivos fiscales y el apoyo al acceso mediante avales y ayudas al alquiler. En cambio, en financiación autonómica sí se aprecia una coincidencia casi unánime sobre la necesidad de reformar el actual modelo, considerado insuficiente y generador de desequilibrios estructurales.

En definitiva, el proceso de diálogo entre los actores sociales valencianos ha permitido avanzar hacia un diagnóstico común de los principales problemas de política económica, centrados en la baja productividad, la infrafinanciación y la precariedad laboral. Sin embargo, aún persiste una fragmentación en las soluciones propuestas, especialmente en las políticas turística y de vivienda. La estrategia industrial destaca como el conjunto de políticas económicas con mayor madurez, mientras que el resto de políticas exigen un esfuerzo sostenido de coordinación, cooperación institucional y diálogo social para consolidar una estrategia de desarrollo coherente, estable y compartida a largo plazo para el año 2040.